

ENMIENDA NÚM 40**Del GRUPO PARLAMENTARIO POPULAR EN EL SENADO (GPP)**

El GRUPO PARLAMENTARIO POPULAR EN EL SENADO (GPP), al amparo de lo previsto en el artículo 107 del Reglamento del Senado, formula la siguiente **propuesta de veto**.

I

Los Presupuestos Generales del Estado de 2022 son el canto del cisne de Pedro Sánchez, el epitafio económico y fiscal de un Gobierno en descomposición que ha devuelto a España al abismo del déficit, la deuda y el paro, tras su calamitosa gestión de la crisis sanitaria y su derivada económica y social. Sobre el castillo en el aire de un cuadro macroeconómico quimérico, que contiene unas proyecciones de crecimiento económico que superan en un punto a la media del consenso de los analistas tanto para el año 2021 como para el año 2022, el Gobierno de Sánchez hace oídos sordos, otro año más, a las llamadas a la prudencia del Banco de España y a la reciente revisión a la baja de las perspectivas del resto de organismos nacionales e internacionales, desde la AIREF al FMI, para terminar presentando unos presupuestos incompatibles con la realidad y con las reglas más elementales de las matemáticas. Previsiones imaginarias de crecimiento, incrementos de ingresos tributarios solo sostenidos por el impuesto invisible de la inflación, y un gasto público faraónico conforman unos Presupuestos Generales del Estado que son el cuento de la lechera populista.

Sin una sola reforma estructural que lo contemple, sin un paquete de ayudas al tejido empresarial digno de tal nombre, sin un plan de consolidación fiscal a medio plazo que dote de credibilidad a la política económica, y sin un atisbo de proyecto de país más allá de la cruda conservación personal del poder, el plan presupuestario es una coartada legislativa para enmascarar una escalada sin freno de gasto electoralista con la que

Sánchez trata de llegar a la orilla del final de la legislatura tras el naufragio de su Gobierno. Esta espiral, estructural e insostenible en el tiempo, de gasto público será nuevamente financiada por las clases medias, autónomos y pequeñas y medianas empresas, a todos los cuales les espera una nueva vuelta de tuerca de fiscalidad confiscatoria que acumulará al cierre del próximo año más de 8.000 millones de euros en subidas impositivas respecto a 2019.

El Gobierno vuelve a penalizar el ahorro y a gravar el trabajo, al tiempo que admite su incapacidad para reducir los niveles de paro y para ensanchar las oportunidades de futuro a 11 millones de españoles en situación de exclusión social. Sánchez gasta como si no hubiera un mañana -cierto que para su Gobierno no lo hay- pero deja en herencia desequilibrios estructurales en las finanzas públicas, un desempleo juvenil superior al 35%, una inoperancia peronista en la ejecución de los fondos europeos (menos del 5% de ejecución real de lo presupuestado en los PGE de 2021 a 31 de agosto) y una hipoteca insostenible de deuda en el entorno del 120% del PIB sobre varias generaciones de españoles. Agotado todo margen de maniobra fiscal frente al riesgo de crisis venideras, la suerte de la economía española pende del hilo de la política monetaria expansiva del Banco Central Europeo.

En un escenario de elevada incertidumbre por la crisis energética, los cuellos de botella en las cadenas globales de suministro y una impredecible espiral inflacionista que ya golpea de lleno a la industria, a las empresas de consumo y a la cesta de la compra (el IPC alcanzó el 5,5% en octubre), las fragilidades endógenas y exógenas del cortoplacismo presupuestario del Gobierno son tan alarmantes como sus condicionamientos políticos.

Por orden cronológico, el primer cambalache extrapresupuestario fue un acuerdo entre los dos socios del Gobierno para aprobar una ley de vivienda que volatiliza los principios de la propiedad privada, la seguridad jurídica y la libertad económica en España. Una dosis venenosa de populismo intervencionista cuya consecuencia más inmediata será el estrangulamiento del mercado residencial de alquiler y la huida en el sector inmobiliario de inversores nacionales e internacionales, alarmados ya por la incautación de los “groseros” beneficios de las empresas del sector eléctrico por parte de un Gobierno impotente ante la crisis energética y la escalada histórica superior al 44% en la factura de la luz.

El doble discurso mantenido durante años por Pedro Sánchez ante las autoridades europeas, por un lado, y ante sus socios de Gobierno y la sociedad española, por otro,

empieza a desmoronarse en el vacío de sus embusteras contradicciones. La negociación presupuestaria entre los dos socios del Gobierno se vinculó a la contrarreforma del sistema de pensiones y a la derogación de la reforma laboral, aun a sabiendas del peligro de incumplimiento de la condicionalidad vinculada a la transferencia de 12.000 millones de euros en fondos europeos. A la espera de conocer el mecanismo de equidad intergeneracional que oculta el ministro Escrivá para sustituir, por las enmiendas de la puerta de atrás, el factor de sostenibilidad que garantizaba un futuro de viabilidad para nuestro sistema de pensiones, los partidos del Gobierno han abierto renovadas hostilidades en su segundo frente de batalla a cuenta de la intensidad de la derogación de la reforma laboral. La derogación fue acordada entre ambas partes en el pacto de Gobierno y confirmada por Sánchez en una de sus componendas con Bildu en el primer estado de alarma inconstitucional.

Aprobada en 2012 por el Gobierno del Partido Popular, la reforma del mercado de trabajo detuvo primero la sangría laboral desatada por la crisis financiera y deuda soberana, impulsó después la creación de tres millones de puestos de trabajo en cinco años de crecimiento ininterrumpido, y ha permitido finalmente la articulación de la figura jurídica de los ERTE para proteger los empleos de millones de españoles durante la crisis sanitaria de la pandemia. Una reforma estructural, por tanto, que ha demostrado ser útil y eficaz en cualquier coyuntura económica.

Ahora, ante la espada podemita y la pared de Bruselas, Sánchez discute la recuperación de la prevalencia de los convenios de sector sobre los de empresa y el carácter ultraactivo de los convenios para empoderar a los sindicatos y desequilibrar de una vez para siempre el diálogo social. Si el deseo de la ministra Calviño es retroceder una década en la modernización de la economía española (ella es la moderada), la ministra Díaz -auténtica mandamás económica del Gobierno- la supera sobradamente en ambición derogatoria y pretende, nada menos, que convertir la legislación laboral en una máquina de destrucción de puestos de trabajo.

La última hipoteca política conocida (a día de hoy) delata la estatura moral del presidente del Gobierno. Si uno de los trueques con ERC a cambio de su apoyo a las cuentas de 2021 se materializó en presupuestos por indultos, el pago a Bildu por su respaldo a las cuentas de 2022, en palabras de Otegi, se materializará en presupuestos por presos. Es este el testimonio más revelador de una política presupuestaria rehén de independentistas y herederos políticos de la barbarie etarra. Es la confesión de parte de

los albaceas del terrorismo: necesitan a Sánchez seis años más para culminar el blanqueo institucional que los homologue, para reescribir la historia de sus crímenes abominables y para alcanzar su objetivo de erradicar la memoria de las víctimas del terrorismo al conjunto del pueblo español. Más allá de los desequilibrios estructurales en nuestra economía, más allá de todo el despilfarro improductivo, del latigazo fiscal a las clases medias, del descrédito de la política económica y de una escalada del déficit estructural hasta el entorno del 5% del PIB, el coste de los Presupuestos Generales del Estado en términos de dignidad nacional es incalculable.

II

En circunstancias normales, los Presupuestos Generales del Estado son el instrumento más valioso de política económica en manos de un Gobierno responsable para impulsar la prosperidad económica y social, la competitividad nacional y la creación de empleo.

Las coyunturas adversas de crisis y de incertidumbre global son especialmente reveladoras de las estrategias gubernamentales. La credibilidad económica y fiscal de un país se juega de forma decisiva en momentos como el actual, el umbral de salida de una crisis tan severa como la pandémica. Es aquí y ahora cuando un Gobierno, tras haber desembolsado una cantidad extraordinaria de gasto sanitario coyuntural asociado al combate contra el coronavirus, puede tomar la decisión de enviar al mundo un mensaje claro de responsabilidad a través de un compromiso sin reservas con la recuperación de la competitividad del tejido productivo, con la sostenibilidad de las finanzas públicas y la corrección de los desequilibrios provocados por el embate de la crisis en la cuenta de ingresos y gastos. Pero no caben ingenuidades con Sánchez. A contracorriente de las grandes naciones de nuestro entorno, el Gobierno se ha aprovechado de la suspensión de las reglas fiscales comunitarias para sustituir el gasto coyuntural asociado a la pandemia por una cantidad equivalente de gasto puramente electoralista.

Esta suplantación de gasto no ha pasado desapercibida ni mucho menos a la Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal (AIReF). En sus nuevas recomendaciones, presentadas esta misma semana durante las jornadas de comparecencias de los Presupuestos, el organismo que preside Cristina Herrero ha instado al Gobierno a adoptar *“las medidas necesarias para evitar que el espacio fiscal que deja la retirada de las medidas para luchar contra la Covid y la positiva evolución de los ingresos pueda*

utilizarse para realizar gasto estructural que no cuente con una fuente de financiación permanente”.

Podemos comparar ya los proyectos presupuestarios antagónicos de dos naciones vecinas, Italia y España, que han sufrido de forma similar los estragos humanos y económicos de la pandemia. En la línea de la mayoría de los Gobiernos europeos, como el francés o el alemán, el Ejecutivo de Mario Draghi ha remitido a Bruselas unas cuentas para 2022 que contemplan una rebaja fiscal de más de 8.000 millones de euros de la mano de una ambiciosa eliminación de las tasas burocráticas que obstaculizan el desarrollo empresarial y una importante rebaja del IRPF a las familias y autónomos, junto con una reducción de casi cinco puntos en el déficit público. En palabras del primer ministro italiano *“bajamos impuestos para potenciar el empleo y ayudar al país a crecer en el medio y largo plazo”*. La conclusión es evidente en sí misma: Las diferencias entre los presupuestos presentados por el Gobierno italiano y el español son las que van de un Mario Draghi a un Pedro Sánchez.

La decisión del presidente del Gobierno español de volver a aumentar los impuestos y cotizaciones sociales a trabajadores, autónomos y empresarios en 2022 supone un nuevo palo ideológico entre las ruedas de la inversión productiva y de la competitividad de nuestro tejido empresarial, privado de 71.500 empresas desde febrero de 2020 y de casi 100.000 empresas menos (97.521) desde que gobierna la izquierda.

Con España definitivamente condenada al vagón de cola de la salida europea de la crisis económica y social, el Gobierno de Sánchez se erige ahora en la mayor amenaza para la capacidad de respuesta de la economía española ante la incertidumbre que se extiende a escala global. Por su irresponsabilidad e imprudencia ante un escenario impredecible, que podría desembocar antes de lo esperado en un endurecimiento de la política monetaria y en una escalada de los costes de financiación de la deuda pública española, el Gobierno de Sánchez corre el riesgo de convertir estos presupuestos en la antesala de una nueva insolvencia de las finanzas nacionales y de una ronda venidera de recortes sociales en la más genuina tradición socialista. Sánchez es ahora guardián y depositario de ese ruinoso acervo; no en vano fue él quien apoyó desde su escaño los feroces tijeretazos sociales de Rodríguez Zapatero.

Por segundo año consecutivo, las proyecciones del cuadro macroeconómico invalidan ya de partida el proyecto de Presupuestos Generales del Estado. El Gobierno ha mantenido inalterado el escenario macro que sirve de base a los PGE, pese al varapalo propiciado en septiembre por el INE al recortar el crecimiento económico del -0,4% al -0,6% en el primer trimestre de 2021 y del +2,8% al +1,1% en el segundo. Esta inédita revisión hace ya imposible el cumplimiento de las ya recortadas previsiones del Gobierno para final del ejercicio (del 9,8% al 6,5%), puesto que el avance de la Contabilidad Nacional del tercer trimestre muestra un crecimiento anual de tan solo el 2,7%.

En abierta colisión con la propaganda del Ejecutivo, la recuperación sigue siendo “claramente incompleta”, en palabras del gobernador del Banco de España: A 30 de junio de 2021, el PIB español se situaba aún 8,4 puntos porcentuales por debajo del previo al estallido de la pandemia, frente a una brecha negativa de solo 2,5 puntos de media en la zona euro. España cerrará 2021 con un crecimiento económico en torno a la mitad de lo fantaseado por el Gobierno justo hace un año (9,8%). Por aquellas fechas, el Partido Popular ya denunciaba que esta hipótesis insostenible convertía a los presupuestos de 2021 en papel mojado antes de iniciar su tramitación parlamentaria. De forma mimética, las estimaciones para el próximo año son ya pasto de la obsolescencia programada en la que recalcitrantemente incurre este Gobierno.

Y es que las últimas proyecciones de organismos nacionales e internacionales echan por tierra la vulgar propaganda gubernamental. La media del consenso de los analistas con respecto al crecimiento de la economía española (5,6% para 2021 y 6,1% para 2022,) es prácticamente un punto inferior a las estimaciones del Gobierno (6,5% para 2021 y 7% para 2022).

El Banco de España ha sido categórico al desconfiar de las estimaciones de las cuentas públicas. La AIREF ha revisado a la baja su escenario central, situando la proyección en 2021 en un 5,5% y en 2022 en un 6,3%. Los análisis publicados por el BBVA sitúan en un 5,2% el crecimiento previsto al cierre de 2021 (1,3 puntos menos que el Gobierno) y en un 5,5% para 2022 (-1,5 puntos), con lo que la entidad financiera concluye que España no recuperará los niveles de PIB previos a la pandemia hasta el año 2023.

Funcas ha sido el último organismo en sumarse a la cascada de revisiones a la baja del PIB, con un recorte desde el 6,3% al 5,1% en 2021 (6% para 2022, un punto menos que el Gobierno). Por su parte, el FMI constata en sus proyecciones una verdad incontrovertible para todos: la incapacidad del Gobierno para revertir las cifras de paro.

Así, el organismo estima una tasa de desempleo del 14,8% a finales de 2022 frente al 13,8% del último trimestre de 2019 a pesar de haber creado 351.000 empleos públicos desde junio de 2018 hasta hoy. Y esta es, sin lugar a duda, una de las piedras de toque de la inoperancia del Gobierno: Disponiendo de 150.000 millones de euros más de recursos en el presupuesto entre los años 2020 y 2022, y de 54.000 millones de euros en fondos europeos entre 2021 y 2022, reconoce que el empleo apenas crecerá un 2,7% en 2022.

Las hipótesis de partida del cuadro macroeconómico son un brindis al sol. El Gobierno calcula en los PGE un deflactor del 1,3%, cuando el Gobernador del Banco de España ha reconocido que sus previsiones de inflación se sitúan en torno al 2,8% para 2022 (el IPC cerró en octubre en el 5,5%, su nivel más alto desde hace tres décadas). De hecho, las presiones inflacionistas esconden problemas estructurales tras la triple escalada de la electricidad, combustibles y materias primas, que amenazan con prolongar en el tiempo el alza de precios, como acaba de alertar la presidenta de la AIReF. Los riesgos de segunda ronda del alza de precios son evidentes en nuestro país, teniendo en cuenta que el 50% del gasto público está indexado a la evolución del IPC.

En este contexto, las estimaciones del Gobierno en relación con el precio del crudo para 2022 son un artificio voluntarista (un 15,6% inferiores a la media de este año), cuando la realidad es que el precio del petróleo se ha duplicado en los últimos 12 meses y acaba de superar los 85 dólares el barril, un 40% más que el precio estimado para 2022. Por otra parte, cada subida del 10% en los precios de la electricidad (España acumula un 44% de subida interanual) conlleva un impacto negativo de 3 décimas en un plazo de 2-3 años, tal y como ha señalado Hernández de Cos en el Congreso de los Diputados.

¿Por qué entonces la obcecación del Gobierno en mantener unas cifras que nadie cree? Por la sencilla razón de que Sánchez necesita, al igual que en los PGE de 2021, unas previsiones infladas de crecimiento económico para cuadrar el gasto babilónico contenido en estos PGE (un 21,7% superior respecto a las últimas cuentas públicas previas a la pandemia) y así dejar sobre el papel un déficit público permisible a ojos de Bruselas. Como ya ocurrió con las cuentas en vigor, el Gobierno construye la casa de los presupuestos por el tejado del gasto, cuadrando a continuación las restantes partidas y variables para que encaje todo en el Excel. En conclusión, en un escenario de crisis inflacionista, los presupuestos se basan en unas previsiones de crecimiento ilusorias que pronto habrán de ser revisadas a la baja, como ya ocurrió el pasado 9 de abril con las que servían de base a los presupuestos de 2021.

IV

Lo único real del cuadro macroeconómico en vigor son los datos de 2020 (imposibles ya de maquillar para el Gobierno), un año en el que España sufrió la mayor caída del PIB desde la guerra civil (-10,8% del PIB). Las consecuencias económicas de la pandemia fueron devastadoras: Una pérdida total de 123.000 millones de euros de riqueza nacional (más que todos los años juntos de la anterior crisis financiera -89.000 millones de euros-) junto con la mayor destrucción de tejido empresarial y de empleo de nuestro entorno, la mayor tasa de desempleo de Europa y unos niveles subdesarrollados de paro femenino (16,36%) y de paro juvenil (35%).

Ni siquiera el rebote automático de la actividad de este año ha permitido reincorporar al mercado laboral a los 178.000 parados más que hay ahora respecto a septiembre de 2019 y a los 239.000 trabajadores en ERTE y 226.000 autónomos en cese de actividad que aún no han conseguido retomar su normalidad laboral. Por desgracia, ni cumpliendo el eufórico escenario del Gobierno, podremos volver a los niveles de desempleo previos a la pandemia (13,8%), por no hablar de cerrar la brecha de nuestros niveles de paro con los de Europa.

Si el cuadro macroeconómico está sesgado por la imaginación del Gobierno, el cuadro de ingresos tributarios (+8,1% respecto a 2021) se sostiene únicamente por el efecto positivo del alza inflacionista en la recaudación tributaria, a costa -eso sí- de una pérdida generalizada de poder adquisitivo para una mayoría de españoles. El empobrecimiento generado por la inflación será particularmente acuciante en los hogares de menor renta, cuya desprotección ante la crisis guarda relación directa con el fracaso de la política económica y con el hundimiento del escudo social, en particular, en lo relativo al colapso en la gestión del Ingreso Mínimo Vital. Por desgracia, la cuota de enero será temible en 2022.

El presente ejercicio, por contra, concluirá con una horquilla de entre 7.000 millones y 10.000 millones de menor recaudación, y eso a pesar de la subida de impuestos contenida en los PGE de 2021 y de la escalada del IPC hasta el 5,5% actual, a cierre de octubre. Esto es debido a la disminuida recaudación procedente tanto de las nuevas figuras tributarias (impuesto sobre transacciones financieras e impuesto sobre determinados servicios digitales, básicamente) como de los impuestos indirectos.

El Gobierno ha dejado en principio para 2023 la subida masiva de impuestos que tiene comprometida en el plan remitido a Bruselas (peajes en las carreteras convencionales, subida del diésel, supresión de la reducción por tributación conjunta...). No obstante,

por si a alguien le quedara algún resquicio de duda sobre el cariz ideológico que impregna la política fiscal, la ministra de Hacienda ya ha puesto los deberes a su comité de expertos: una subida de impuestos a los españoles de 80.000 millones de euros.

El trágala de los hachazos impositivos de Pedro Sánchez se demuestra de forma evidente en su ambivalente carácter procíclico y anticíclico. Es decir, este Gobierno aumenta los impuestos en todo momento y lugar, cuando lo que debería hacer es rebajarlos de manera neta siempre que sea posible. Pero Sánchez los sube sea cual sea la situación económica y social en la que nos encontremos, tanto en las crisis como en las recuperaciones. Si crece la economía un 2,1%, como en 2019, sube los impuestos porque crece la economía. Si se desploma la economía un 10,8%, como en 2020, sube los impuestos porque se desploma la economía. Si hay atisbos de recuperación de la economía, que rebotará en torno al 5,0% en 2021, sube los impuestos porque hay atisbos de recuperación en la economía.

Los Presupuestos de 2022 no podían faltar a la cita anual del pisoteo tributario a las clases medias españolas. Porque, si el impacto recaudatorio en el próximo año de las alzas tributarias ya aprobadas en los PGE de 2021 ascenderá a 2.135 millones de euros, las subidas previstas para 2022 (impuesto sobre residuos, plásticos de un solo uso, nueva reducción del límite de aportaciones a los planes privados de pensiones, tipo mínimo del 15% en el impuesto de sociedades, aumento del 1% de todas las tasas, subida del impuesto de matriculación, elevación de las bases máximas de cotización a la Seguridad Social y alza de las cotizaciones de los autónomos) se calculan en una cantidad del mismo orden, en torno a los 2.000 millones de euros.

V

En el trienio 2020-2022, el incremento del gasto público habrá generado un déficit público acumulado cercano a los 300.000 millones de euros. Innumerables son los ejemplos del pródigo despilfarro de los recursos a cuenta del bolsillo del contribuyente. El presupuesto de Presidencia del Gobierno, incluyendo el programa de cobertura informativa, duplica al del último Gobierno del PP (+97%). Solo en altos cargos, el Gobierno de Sánchez cuesta 108 millones de euros más a los españoles que en 2018. Mientras reparte 400 euros a cada joven, con independencia de su renta, para que lo gaste donde el Gobierno le diga, endosa al mismo tiempo a cada español una deuda per cápita de 5.350 euros, incluidos esos mismos jóvenes. Mientras se niegan ayudas a nuestros autónomos y pymes, se incrementa un 46,7% el presupuesto del Ministerio

más prescindible e inoperante de nuestra democracia, el de consumo del ministro Garzón.

El déficit estructural se eleva al 5%, una losa cada vez más pesada sobre el horizonte de la economía española. La deuda pública, que en palabras de la ministra Calviño “pagarán nuestros hijos y nuestros nietos”, supera los 1,4 billones de euros. Las compras de deuda del Banco Central Europeo (acumula 330.000 millones de deuda española) y los artificialmente bajos tipos de interés son el único salvavidas financiero de la economía española, teniendo en cuenta que el Gobierno se niega obcecadamente a presentar sendos planes de reformas y de consolidación fiscal a medio plazo para dotar de certidumbre y credibilidad a la política económica. Como señaló la presidenta de la AIREF en su comparecencia en la Comisión de Presupuestos del Congreso de los Diputados, un plan de consolidación fiscal no implica ni mucho menos recortes sociales, sino un programa creíble de eficiencia en el gasto público y de crecimiento económico a través de reformas estructurales, al que además está obligado el Gobierno en virtud del artículo 11.3 de la Ley Orgánica de Estabilidad Presupuestaria y Sostenibilidad Financiera (LOEPSF).

Los Presupuestos, por otra parte, incorporan 27.633 millones de euros en fondos europeos, 1.000 millones de euros más que los presupuestados -que no ejecutados- en 2021. El Gobierno, tras negarse a crear una Autoridad Independiente para gestionar con transparencia y eficacia el reparto de los recursos, oculta a los españoles el reciente acuerdo de cumplimiento (*operational arrangement*) acordado con Bruselas sobre el calendario de reformas asociadas a la liberación de los próximos tramos.

Aún en el caso de que los fondos sean entregados con normalidad, de poco servirán si el grado de ejecución es tan bajo como el que el Gobierno arrastra en este ejercicio. Una maraña de burocracia retrasa la fluida canalización de los mismos, hasta el punto de que a 31 de agosto de 2021 la ejecución media de los fondos, excluyendo la partida destinada a vacunas (la única eficazmente implementada al no depender del Gobierno de Sánchez sino de la UE y de las CCAA), era del 20%. Un porcentaje que incluye las transferencias a otros fondos creados ad hoc, organismos públicos u otros niveles de administración pública que, en realidad, no supone una ejecución real y efectiva de los mismos.

Llueve sobre el mojado de la negligencia gubernamental para llevar a término la ejecución eficaz de cualquier plan:

- De los 40.000 millones previstos para los préstamos ICO inversión se han concedido

sólo 8.419 millones de euros, el 21% un año después de su aprobación.

- De los 10.000 millones del fondo de rescate de SEPI, apenas se han concedido 1.347 millones, el 13,5%, mientras decenas de compañías señeras en riesgo de concurso de acreedores (pertenecientes en su mayoría al sector turístico, el más golpeado por las restricciones de la crisis sanitaria) hacen cola a las puertas del organismo público para recibir unas ayudas que no llegan tras la imputación de la cúpula de la SEPI por un presunto delito de malversación en el rescate de la compañía aérea Plus Ultra.
- De los 7.000 millones de ayudas directas para autónomos, apenas se ha concedido algo más de la mitad. Se ha dejado en la cuneta a una mayoría de autónomos por el diseño y las condiciones exigidas por el Gobierno, un error que han vuelto a cometer en la concesión de las ayudas especiales a los autónomos de La Palma.

A fecha de 31 de agosto de 2021, la ejecución del presupuesto de 2021 se traduce en un clamoroso retraso. Destaca la bajísima ejecución de políticas como comercio, turismo y pymes (5,0%), I+D+i (14,8%), acceso a la vivienda y fomento de la edificación (17,7%), industria y energía (20,2%) o infraestructuras (2.993 millones de euros de los 9.494 millones presupuestados). Los precedentes en la ejecución presupuestaria de este Gobierno son alarmantemente ineficaces e ineficientes, lo que hace dudar seriamente de la capacidad de ejecución de los 70.000 millones de euros a que ascienden los fondos europeos y del nivel del efecto multiplicador potencial de los mismos sobre el crecimiento de la economía española.

La incapacidad del Gobierno para llevar a término sus propios planes alcanza su cénit en el Ingreso Mínimo Vital, parte nuclear de su negligente escudo social. Más de un año después de su aprobación, la presunta medida estrella del Gobierno para la lucha contra la pobreza apenas alcanza un tercio de la población que se marcó como objetivo. Según el último informe de Cáritas, tan sólo el 18,6% de los solicitantes en pobreza severa lo está cobrando o lo tiene concedido. A la mitad de los solicitantes en pobreza severa, el 49%, le ha sido denegado. En total, tres de cada cuatro peticiones están siendo rechazadas. De los 3.000 millones de euros presupuestados, solamente se ha ejecutado alrededor del 50%. El fracaso del Ingreso Mínimo Vital, lastrado por las falsas expectativas propagandísticas y el colapso burocrático del Gobierno, es el testimonio del hundimiento de toda la política social de Pedro Sánchez.

Después de tres años y medio de Gobiernos sanchistas, España es un país más pobre, con mayores niveles de desigualdad, con menos oportunidades para las mujeres, para los jóvenes, para las familias (especialmente las numerosas y las monoparentales) y

con una desprotección rampante de los menores, de las personas con discapacidad, y de todos los que viven en riesgo de exclusión social. La incompetencia del Gobierno, demostrada por enésima vez en su ineptitud para poner freno a la escalada histórica de la factura eléctrica, ha convertido a España en un país hostil para los grupos de población más vulnerables.

VI

La conclusión de esta enmienda a la totalidad es obvia. Los Presupuestos Generales del Estado para 2022 nacen tan muertos como las expectativas de supervivencia política del Gobierno de coalición populista. Sin embargo, aun en los meses crepusculares de su presidencia, Pedro Sánchez conserva la oportunidad postrera de corregir el rumbo insensato de su mandato. El presidente del Gobierno ligó su suerte al blanqueamiento de los enemigos de nuestro sistema constitucional, pero aún está a tiempo de rectificar y romper las ataduras que le hacen cautivo de la antipolítica y del separatismo radical. Aún dispone de margen para retirar el proyecto presupuestario en la tramitación parlamentaria y poner en marcha el plan nacional de reformas que Pablo Casado le propuso hace ya más de un año.

En palabras del presidente del Partido Popular, “a tiempo estamos de ir por el buen camino; el camino del reformismo, de la moderación, del europeísmo, del diálogo social de verdad, de los consensos con la oposición y las administraciones. En definitiva, la solución que siempre se ha puesto en marcha cuando ha habido que sacar a España de una grave recesión. Mi balance es de esperanza y de mirar al futuro creyendo que podemos salir de esta. Diciendo la verdad por dura que sea, sin quedarnos en la demagogia de la propaganda. Diciendo que va a ser duro y que va a requerir esfuerzos”.

Estas son palabras recientes del próximo presidente del Gobierno. Condensan la responsabilidad del ideario subyacente en un proyecto de país a la altura del talento de la sociedad española. Más pronto que tarde, en dos años a lo sumo, el presidente del Partido Popular devolverá la dignidad a la institución del Gobierno de la Nación y pondrá en marcha la agenda de reformas estructurales más ambiciosa de las últimas décadas. La economía española recuperará la seriedad, la credibilidad y el prestigio perdidos en el despeñadero populista. Nuestro país volverá a la primera fila europea del crecimiento económico y creación de empleo, como ya ha demostrado en recientes coyunturas históricas. A la espera de ese momento, el Grupo Parlamentario Popular presenta esta enmienda a la totalidad al Proyecto de Ley de Presupuestos Generales del Estado para el año 2022, por lo que solicita su devolución al Gobierno.

